

# La irrupción de los hijos de la modernización.

Ruiz Encina, Carlos y Sáez, Benjamín.

Cita:

Ruiz Encina, Carlos y Sáez, Benjamín (2012). *La irrupción de los hijos de la modernización*. *Análisis del Año*, (14), 27-43.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/httpwww.nodoxxi.cl/15>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pfDv/4aa>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.  
Para ver una copia de esta licencia, visite  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

*Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.*

## La irrupción de los hijos de la modernización

---

Carlos Ruiz  
Benjamín Sáez

### LA MODERNIZACIÓN CHILENA: DE ENSALZADA A CUESTIONADA

Corría el año 94 y José Joaquín Brunner, uno de los ideólogos más gravitantes de la Concertación, nos daba la bienvenida a la modernidad. Una opción ineludible, que ya tocábamos con la punta de los dedos, nos decía. Coronando el argumento con una idea de Carlos Fuentes: “somos un continente en búsqueda desesperada de su modernidad”<sup>1</sup>. Sin pudor de engrosar la larguísima lista de las contradicciones de la modernidad, el triunfalismo de que se caminaba a paso largo hacia el fin de la historia, no se desvaneció en los gobiernos venideros.

¿Qué ocurrió con ese paso rampante hacia esa modernidad prístina, carente de contradicciones? Ni el balde de agua fría de la crisis asiática –cuyas consecuencias se respiran hasta el día de hoy en la reconfiguración del trabajo<sup>2</sup>– bastó para que dejaran de chocar contra la pared. Esa ansiedad por encontrarse con la modernidad parece haber precipitado el canto de una victoria precoz. Sin más vueltas, el proyecto trazado una década atrás, con apenas un gobierno en el cuerpo y la porfiada resistencia de varios “enclaves autoritarios”, se daba por terminado. Contra ese optimismo, porfiaban varios lastres que ese mismo sector acusaba como escollos a la posibilidad de reconstruir económica y socialmente el país, a saber: la pronunciada concentración económica y del poder en la sociedad, la baja densidad de la estructura productiva, y la inestabilidad externa, entre otras<sup>3</sup>. Pero había que seguir buscando, mientras los escombros se apilaban.

Empero, cabe recordar –con Alain Touraine– que si bien hay una modernidad, hay en cambio varias modernizaciones. Y de lo que aquí se habla, en realidad, es de un proyecto de modernización concreto, de origen autoritario por

---

1 Brunner, José Joaquín (1994) *Bienvenidos a la Modernidad*, Planeta, Santiago.

2 Narbona Karina, Páez Alexander y Tonelli Patricio (2011) *“Precariedad Laboral y Modelo Productivo en Chile”*, Serie Mejor Vivir, Fundación Sol, Santiago.

3 Foxley, Alejandro (Ed.) (1983) *“Reconstrucción Económica para la Democracia”*, CIEPLAN, Santiago.

lo demás, que parecería entonces coronarse con éxito bajo el advenimiento de la democracia y el crecimiento económico prolongado, ambos elementos concebidos bajos su molde. No es otra cosa lo que se celebraba.

El difuso malestar a fines de los años noventa puso una primera señal de alerta sobre el rumbo de esa modernización. Si bien las consecuencias materiales eran bastante nítidas para quienes soportaron los costos de la última gran crisis económica del siglo XX chileno, éstas no adquirirían una expresión igual de clara en la esfera pública. Por esos años, el PNUD acusaba los malestares de la modernización, mientras autocomplacientes y autoflagelantes discurrían dentro de la alianza oficial sobre el trecho avanzado, sin dejar de caminar. Las ciencias sociales tuvieron entonces también su propio *best seller*, a manos de la denuncia del trasfondo del consumo (la dominación) y el gatopardismo de la transición, dibujando lo que aparecía como el lado oscuro de esa primera década de democracia<sup>4</sup>.

A pesar de ello, las cosas seguían moviéndose en una dirección en que, entre sumas y restas, la compulsiva expansión del consumo parecía el más claro motivo de celebración, con su paso arrasador sobre muchos de los moldes de la sociedad chilena pretérita, y expresión de nuevos patrones. No obstante, bajo el ruido ensordecedor del exitismo, apenas se escuchaba la marcha imparable mediante la cual el panorama se preñaba de las contradicciones propias de un nuevo ciclo. Uno en que el mundo agrario era cada vez más pasado que presente; al tiempo que disminuía su peso en la sociedad, su fisonomía mutaba aceleradamente hacia coordenadas inéditas, históricamente. Con altos niveles de movilidad ascendente acompasados por abruptas caídas, y una heterogeneidad –paradójicamente– tan compartida que acaba en un enorme pozo gris, del que buena parte de la población entra y sale antes de alcanzar a levantar la mesa<sup>5</sup>. En suma, se trataba de un momento de la historia lleno de altibajos, en que se alcanza una gloria hoy recordada por su mediocridad.

El año que termina ha puesto nuevamente en tela de juicio el rumbo del ciclo reciente de modernización, aunque esta vez los protagonistas de la historia no intentan comprender desde lejos el malestar incubado a lo largo de estos años. Lo experimentan como hijos de dicha modernización reciente. Son aquellos que ríen y lloran las consecuencias de este “neoliberalismo avanzado”, de la peculiar forma en que sólo pueden hacerlo quienes no conocen otra cosa. De ahí la importancia de rastrear la socio–génesis de la revuelta estudiantil que este año ha conmocionado al país y, como se sabe, también a amplias zonas del mundo; la región, Europa y Norteamérica. Recuperar un hilo que permita situar en perspectiva las interpretaciones de que este año todo cambió, como si de pronto este fuese otro

---

4 Moulian Tomás (1997). “Chile Actual Anatomía de un Mito”, Serie Punto de Fuga, Colección Sin Norte, Universidad Arcis, Santiago.

5 Ruiz, Carlos y Toro, Eduardo (2006). “La Opacidad Social”, en Revista Análisis del Año 2005, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago.

Chile. La mirada sobre los entresijos del modelo puede alumbrar cursos en los que se fueron acumulando contradicciones que acaban de estallar.

Lo cierto es que se esperaba que quienes salieron a las calles el año recién pasado fuesen los grandes beneficiados, el resultado más diáfano de todas las conquistas acumuladas en el camino para alcanzar la cima de la modernización en cuestión: aquellos que nacieron sin conocer las precariedades –de todo tipo, no sólo las económicas– superadas por etapas avanzadas de semejante logro inédito en nuestra historia, al punto de ubicarnos a las puertas “del desarrollo”. Se esperaba que fuesen la encarnación de todo ese éxito. Sin embargo, irrumpen cuestionando muchos de los cimientos mismos de semejante modernización, ¿acaso, precisamente, alegando –con Habermas– por el incumplimiento de las promesas mismas de la modernidad?

## UN MALESTAR DE LARGA HUELLA

Mucha tinta se ha gastado en señalar que el 2011 marca un antes y un después en el decurso histórico reciente de Chile. Se ha hablado de un cambio en las formas de entender la política, de un “nuevo amanecer de los movimientos sociales”<sup>6</sup>, de “la primavera chilena”<sup>7</sup> e incluso, entre los más entusiastas, de una “coyuntura pre revolucionaria”<sup>8</sup>.

No es primera vez que el movimiento estudiantil abre el enconado debate por establecer un punto de inflexión en la historia reciente. Antaño, en los años veinte y los sesenta de la centuria pasada, las interpretaciones lo apuntaban. Más cerca, la llamada revolución pingüina de 2006, aparece como antecedente inmediato de los intentos actuales por equilibrar la ecuación entre lo que va quedando atrás y lo que aparece como novedad en las formas de acción social y la constitución de nuevos actores. Sin duda, existe una solución de continuidad entre ambas coyunturas, determinada por la descomposición sostenida del espectro político y sus instituciones desde fines de los años noventa; la maduración de nuevos actores al calor de los cambios en la estructura social, las formas de acumulación, consumo y sociabilidad a ras de calle; además del larvado descontento asociado a la desilusión mesocrática, a manos de unos ingresos que crecen en medio de unas agudas y persistentes brechas de desigualdad, de sobreendeudamiento, de precarización del empleo, en fin, de incertidumbre.

Hace apenas un lustro presenciamos una coyuntura cuya novedad se signó en la emergencia de un movimiento expresivo de nuevas formas de acción política; el inédito nivel de adhesión que concitó, más allá de los sectores populares, hasta alcanzar unos heterogéneos segmentos medios; y la clara expresión de

---

6 Grez, Sergio, *The Clinic*, Año 12 N° 409, 1 de septiembre de 2011.

7 Lagos, Ricardo, *El Quinto Poder*, 3 de agosto de 2011.

8 Salazar, Gabriel, *Universidad de Los Lagos*, 29 de agosto 2011.

contradicciones que sobrepasaban la mera crisis sectorial, apuntando los patrones culturales vigentes y las expectativas asociadas a ellos<sup>9</sup>. Algunos de los elementos nuevos que puso sobre la mesa la “revolución” de los pingüinos registran antecedentes en experiencias como el *Mochilazo*, proceso en que el movimiento secundario deja atrás su rol tradicionalmente relegado a las espaldas de las movilizaciones de la educación superior, y comienza a generar formas más amplias de organización. Sin salir totalmente de los cauces de la reivindicación sectorial, este movimiento de 2001 constituye un antecedente temprano de organización por fuera de los actores tradicionales y sus ramificaciones hacia los espacios formales de conducción a nivel universitario y secundario. Es el momento pingüino en 2006, sin embargo, el que –orientado hacia el interés colectivo–, tirará por los suelos aquellos aspavientos con que se anunció el fin de nuestra historia, bajo la exaltación de unos incontrarrestables efectos desarticulantes del consumo, el individualismo y la incapacidad de construir horizontes colectivos de acción.

Contra la mera exaltación de la novedad del movimiento de 2006, conviene reparar en el papel jugado por la derecha, que desde sus medios de comunicación acicateó el proceso para desestabilizar el gobierno de Bachelet, y en la capacidad de los mecanismos institucionales de resolución de conflictos y los antes mencionados medios para, finalmente, desactivar los niveles de conflictividad expresados en la movilización. Los más de 900 establecimientos movilizados a lo largo del país, terminaban así contemplando las mismas sonrisas de siempre alzando las manos en la celebración del Acuerdo por la Educación que acaba remozando la LOCE en una insuficiente Ley General de Educación. De esta forma, lo que para ese entonces fue la primera gran convulsión del Chile bicentenario, abre la cancha para la última conquista de la política de los acuerdos en su intento por mantener sus excluyentes patrones y grados de gobernabilidad.

El aprendizaje de la experiencia de 2006 es uno de los aspectos más reiterados en la discusión sobre la novedad de las movilizaciones de este año. La imagen del festín de la Alianza y la Concertación reapareció fantasmagóricamente, anunciando el fracaso de los intentos por cerrar las movilizaciones mediante acuerdos parlamentarios o mesas de diálogo. En este sentido, otra arista destacable estriba en el hecho de que la desconfianza en los partidos políticos y las instituciones como vía legítima para el procesamiento de conflictos, lejos de reducirse al ámbito estudiantil, se expresó en vastos y mayoritarios sectores de la sociedad chilena. Según datos de Adimark, en agosto de 2011 se alcanzan niveles históricos (desde el inicio de la medición en 2006) en la baja aprobación del ejecutivo (27%), las coaliciones políticas (cerca de un 20% la Concertación y la Alianza) y el Congreso (también en torno a un 20%).

---

9 Ver Ruiz, Carlos (2007) *¿Qué hay detrás del malestar con la Educación?* en Revista Análisis del Año 2006, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago.

De otra parte, los inéditos grados de masividad que alcanzan las convocatorias en la mayoría de las jornadas de protesta efectuadas –apuntados, junto a la visibilidad internacional, como otra de las particularidades de esta experiencia–, resultan expresivos de lo extensivo que resulta este malestar en la sociedad chilena, al punto de llegar a niveles históricos de participación durante la concentración familiar del 21 de agosto o “marcha de los remolinos”, que contó con una participación cercana al millón de personas de acuerdo a las estimaciones de la organización, acompañada de manifestaciones importantes en otras ciudades como Concepción, donde se superan las 2.000 personas.

Más allá de las cifras y el malestar sin apellido, es el carácter social de los actores y el contenido político de sus demandas, el rasgo que permite encontrar aquello que no termina de nacer entre lo viejo que no acaba de morir. Pese a que la conducción formal del proceso y sus caras más visibles provienen de los ámbitos más tradicionales de la educación superior, su rasgo distintivo es la incorporación masiva de nuevos actores. Los estudiantes de las universidades privadas, centros de formación técnica, institutos profesionales y liceos técnicos despliegan una fuerza social<sup>10</sup> que acaba desbordando a una conducción que, en manos del Partido Comunista, busca desde un inicio la vía institucional como capital para negociar su integración al equilibrio de fuerzas que emergió de la transición a la democracia. El inicio de las movilizaciones de los estudiantes de la Universidad Central contra la venta del 50% de las acciones y el 45% de las instalaciones de dicha universidad a la Sociedad de Inversiones Norte Sur –de capitales ligados a personeros de la Democracia Cristiana– en marzo de 2011, asoma como el primer paso en la construcción de un nuevo escenario.

Son además estos sectores los que pondrán el problema del lucro como la causa última del malestar con un sistema educacional, cuya crisis deja de ser un problema de política pública, para tener expresión directa en los modos de acumulación y la estructuración del poder que arroja la mentada modernización reciente. De tal suerte, esto da cuenta del agotamiento de los términos de la transición a la democracia, y su capacidad para mantener en equilibrio los soterrados signos de malestar acumulados desde fines de los años noventa. En ello estriba la novedad del año que recién termina, aunque sus posibilidades de reconstitución o la emergencia de nuevos pactos de alianza ha quedado abierta.

---

10 Al decir de Gramsci, la masificación de la fuerza social no tiene su origen en la acción del partido, que conduce y armoniza, sino en las instituciones mismas de la vida social del mundo popular. De ahí que pueda existir acción partidaria sin fuerza social y una fuerza social que acaba desbordando las funciones de conducción partidaria, más aún en un contexto en que la relación entre los partidos y las instituciones de la vida social es de muy baja intensidad. Como en el caso chileno. Ver: Gramsci, Antonio (1981), “*Cuadernos de la Cárcel*”, Tomo I, Ediciones Era, México D.F.

## ¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN SUPERIOR? EL PROBLEMA ES EL LUCRO

En el transcurso de 2011 se han hecho cada vez más evidentes los entresijos del sistema de educación superior chileno: inédito en sus niveles de cobertura, alto componente de gasto privado, costo de sus aranceles, participación del sector privado en el sistema crediticio, gravitación de la vocación de lucro, desfinanciamiento de las universidades estatales, etc. Al igual que el movimiento pingüino, que mostró la otra cara de los expandidos grados de cobertura de la instrucción primaria y secundaria, el año que termina desnudó las hondas contradicciones aparejadas a la expansión –principalmente privada– de la matrícula universitaria.

Una de las frases reiteradas hasta el cansancio en los últimos tres gobiernos, para relevar los niveles de movilidad social que ha estimulado el modelo de modernización vigente, es la fórmula que consagra que 7 de cada 10 estudiantes actuales de la educación superior constituyen la primera generación, dentro de sus respectivas familias, en ingresar a dicho sistema. Sin embargo, pareciera que como otras tantas aristas del proceso de modernización reciente, la expansión del sistema de educación superior expresa, a un tiempo, nuevas formas de integración y exclusión sin necesidad de recorrer una gran distancia en la estructura social.

En efecto, tal crecimiento de la matrícula en la educación terciaria corre el cerco que separó, durante buena parte del siglo anterior, a un pequeño porcentaje de incluidos de una gran masa de excluidos de dicho sistema. La matrícula en el sistema de educación superior se viene incrementando sostenidamente desde fines de los años ochenta. De acuerdo a datos del CINDA, la tasa bruta de escolarización post–secundaria fue desde menos del 10% en 1965 hasta más del 40% en 2004<sup>11</sup>, llegando a cerca de un millón de estudiantes en 2010 (con proyecciones para continuar creciendo por varios años). No obstante, dicha expansión no resulta homogénea, beneficiando a los sectores más altos de la pirámide de ingresos, lo que permite que la expansión hacia los segmentos adyacentes se haga efectiva sólo una vez que se ha alcanzado el punto de saturación en la demanda de los primeros. De tal modo, es hacia fines de la década de 2000 que se incorporan con fuerza estudiantes pertenecientes a los primeros quintiles de ingresos, de forma abrumadora a aquellas universidades menos selectivas así como a instituciones de educación técnica, explicando el abultamiento del componente técnico profesional en el total de matrícula en la educación superior. Finalmente, la cobertura neta por quintil en el acceso a la educación superior será, desde el quintil I al V, de 17%, 21%, 25%, 35% y 57% respectivamente, en 2010<sup>12</sup>.

---

11 Orellana, Víctor (2011). “Nuevos Estudiantes y Tendencias Emergentes en la Educación Superior: Una Mirada al Chile del Mañana” en Jiménez, Mónica y Lagos, Felipe “Nueva Geografía de la Educación Superior y de los Estudiantes”, Aequalis, Santiago.

12 Ibíd.

Paradójicamente, el crecimiento de la matrícula en la educación superior convive con el costo relativo de aranceles más alto del mundo, esto es, un arancel promedio de 41% del PIB per cápita, lo que equivale aproximadamente a \$280.000 pesos chilenos, casi \$100.000 por sobre el sueldo mínimo vigente<sup>13</sup>.

Considerando el alto costo de los aranceles, junto al reciente repunte de la matrícula en la educación superior hacia los sectores de menores ingresos, se entiende la tremenda gravitación del sistema de créditos que sustenta dicho curso de cosas. El rasgo más característico de este sistema, como se sabe, es que opera bajo la lógica del financiamiento a la demanda. A nivel agregado, en 2010 los créditos llegaron a concentrar cerca de un 70% del total de presupuesto estatal para la educación superior. Al igual que sucede con los aranceles, el costo de los créditos resulta con creces superior a los existentes en los países desarrollados, en que los estudiantes pagan entre un 2,6% y 7% de su sueldo futuro; en Chile este porcentaje asciende a un 18%<sup>14</sup>, anunciando un abultado bolsón de endeudamiento. Desde esta perspectiva, se relativiza el optimismo con que se anuncian las mayores tasas de retorno obtenidas por haber salido con éxito de la educación superior. Aún más, si se considera que el porcentaje promedio de deserción en este segmento es de aproximadamente un 40%.

El sistema de créditos y ayudas estudiantiles tradicionalmente se concentró en las universidades del Consejo de Rectores (Fondo Solidario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Presidente de la República, Créditos CORFO, etc.), y en menor medida en las universidades privadas (con los créditos CORFO, principal mecanismo crediticio en las universidades privadas hasta 2005). Sólo un pequeño porcentaje del financiamiento se destinaba a la subvención del acceso a la educación técnica, mediante un sistema propio de becas de arancel. A partir de 2006, el Crédito con Aval del Estado (CAE) expande los alcances de los mecanismos de subvención a la demanda hacia toda institución acreditada, incluyendo Universidades Privadas, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. La importancia del crédito con garantía estatal en el aumento de la matrícula técnico-profesional ha sido reconocida, en reiteradas ocasiones, por los directivos de estas instituciones, que en 2008 llegan a captar cerca de un 45% del total de créditos CAE<sup>15</sup>. También deviene ésta una importante fuente de financiamiento para las universidades privadas, que pasan a captar aproximadamente un 40% del total CAE<sup>16</sup>.

El Crédito con Aval del Estado fue concebido (en la época en que Sergio Bitar ocupaba la cartera de Educación) para reemplazar el Fondo Solidario como

---

13 Meller, Patricio (2011). "Universitarios, el Problema no es el Lucro, es el Mercado". Uqbar Editores, Santiago.

14 *Ibíd.*

15 MINEDUC (2008). "Bases para una política de Formación Técnico-Profesional en Chile".

16 Cuenta Pública "Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores. Balance 2006-2010"

principal mecanismo de financiamiento del acceso a la educación superior. Las movilizaciones universitarias de 2005 finalmente impidieron la desaparición del Fondo Solidario en las universidades del CRUCH, aunque en la práctica, la enorme expansión del crédito con garantía estatal lo convierte en la forma más extendida de financiamiento: desde su creación, en 2006, se expande hasta alcanzar el 48% de las ayudas estudiantiles, y un tercio del presupuesto total asignado por el Estado a la educación superior en 2010<sup>17</sup>. Su crecimiento se concentra sobre todo en el quintil de menores ingresos que, de acuerdo a datos de Comisión Ingresos (administradora del crédito), acumula un 40% del total de beneficiarios en el período 2006–2009<sup>18</sup>. Si a esto se agrega la participación del segundo quintil para el mismo período, el CAE presenta un 60% del total de beneficiarios entre el 40% de menores recursos, lo que equivale a más de 100.000 estudiantes. Debido a la gravitación cuantitativa de este crédito en el financiamiento de la expansión apuntada, con bajo nivel de cobertura respecto a los aranceles reales, altas tasas de interés (6%) y niveles de morosidad cercanos al 40%, tiene el efecto de acentuar los costos asociados a tal expansión de la matrícula, pavimentando el camino al estallido de las sentidas contradicciones que están en la base de la irrupción del movimiento social.

Luego, queda clara la relación entre esta fórmula de financiamiento estatal –el CAE–, y la creación de nuevos y enormes nichos de acumulación regulada que abren paso a la desbocada multiplicación de ansias rentistas, en las que una educación cara y no necesariamente buena, cuando no abiertamente mala, se mezcla con la adquisición a muy alto costo de ilusiones de ascenso social, cuya realización termina por resultar cada vez más difusa a ojos de centenares de miles de familias.

Uno de los puntos gravitantes en el diseño del CAE es la participación de la banca privada en el sistema. Los bancos se encargan de pagar el costo de arancel a las instituciones en que estudian los beneficiarios. Además, para incentivar su participación, pueden vender una parte de su cartera al Estado (máximo 50%) que, junto al precio original de la cartera comprada, entrega una bonificación adicional a la banca. Se estima que la rentabilidad de este tipo de transacciones ronda un 30%, el cual se agrega a las ganancias regulares en torno a tasas del 6%. Finalmente, los bancos perciben una tasa de retorno real por aproximadamente un 18%, corriendo para ello riesgos mínimos, pues el Estado asegura –en calidad de aval– la cobertura del 90% de la deuda acumulada<sup>19</sup>.

---

17 De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES) para 2010.

18 Cuenta Pública (2011). “Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores. Balance 2006–2010”, Ingesa, Santiago.

19 Meller, Patricio (2011). “Universitarios, el Problema no es el Lucro, es el Mercado”, Uqbar Editores, Santiago.

Pero no sólo los bancos incrementan sus utilidades mediante este sistema. Entre las instituciones de educación superior, particularmente los CFT e IP, el CAE ha desatado una vorágine por la captación de recursos que, nuevamente, siembra dudas sobre los procesos de acreditación, en tanto requisito para la entrega de dicho crédito. En octubre de 2011, una investigación realizada por CIPER reveló una serie de irregularidades que han convertido la acreditación en un trámite fácil para asegurar el crecimiento de los planteles de educación técnica profesional, que por ley pueden lucrar<sup>20</sup>. El CAE deviene para estas instituciones una fuente inamovible de recursos, que caen en sus arcas sin que tenga importancia alguna el nivel de ingresos de sus estudiantes o si estos terminan o no sus carreras.

Algo similar ocurre en un buen puñado de universidades privadas que, pese a la proscripción del lucro, acaban diseñando ingeniosas fórmulas para saltar la institucionalidad vigente y obtener réditos de sus estudiantes, y en particular de la gallina de los huevos de oro que representa el crédito con garantía estatal. Este fue uno de los temas más controversiales al calor de las movilizaciones de 2011, llegando incluso a incidir de modo relevante en la salida de Lavín de la cartera de Educación, por sus nexos con la Universidad del Desarrollo. Datos recientemente conocidos por la opinión pública revelan que la inmobiliaria Ainavillo –propiedad de los ministros Lavín y Larroulet– recibió más de 4.166 millones de pesos por concepto de arriendo de inmuebles para estas labores. Una situación similar, por lo demás, a la de otras casas de estudio, como la Universidad de las Américas (UDLA), hoy por hoy la de mayor matrícula en el país, que pagó cerca de 24.131 millones de pesos a Inmobiliaria Educacional S.A<sup>21</sup>. Varios otros nombres de las entremezcladas redes de poder económico y político en el país, se han visto ligados a universidades privadas, entre ellos los ex ministros de educación Sergio Bitar (Universidad Mayor), Sergio Molina y Ernesto Schiefelbein (Universidad de Viña del Mar), Gutemberg Martínez (Universidad Miguel de Cervantes), Pablo Longueira (Universidad San Sebastián), Ernesto Livacic (Universidad Central), Juan Carlos Latorre (Universidad Pedro de Valdivia), por apuntar algunos.

Aunque las razones de los inéditos grados de adhesión que suscitó el movimiento universitario no se agoten en la crisis de la educación superior, no resulta extraño que se articulen en torno a un sistema cuya dinámica tuvo, entre sus muchos efectos, transparentar la relación directa entre las dilatadas ganancias de unos cuantos, y el endeudamiento creciente del heterogéneo segmento que representan esos 7 de cada 10 estudiantes provenientes de familias que por primera vez ingresan al sistema. En este sentido, no está de más recordar que “no es de

---

20 CIPER. “Las reveladoras actas de acreditación de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica”, Reportajes de Investigación, Verónica Torres, 13/10/2011.

21 CIPER. “Cómo lucran las universidades que por ley no deben lucrar”, Reportajes de Investigación, 19/08/2011.

la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de lo que esperamos nuestra cena, sino de sus miras al interés propio<sup>22</sup>. Que el mercado no fija sus límites de forma espontánea, que aquellos que establecen las reglas del juego son actores de carne y hueso que, en virtud del encuentro y choque de sus intereses, acaban definiendo hasta dónde han de llegar los excesos del mercado. Por ello la separación del mercado y el lucro como aspectos claramente distinguibles, está condenada a no ser más que un eufemismo<sup>23</sup>.

En términos normativos el acceso a la educación superior, y lo que conlleva en cuanto promesa de movilidad social, concentra parte importante de las aspiraciones y esperanzas socialmente más arraigadas, que sostienen la conformidad con los actuales patrones de modernización. Las extremadas contradicciones del sistema de educación superior, así como hacen tambalear las condiciones materiales de vida, acaban desequilibrando a su vez elementos subjetivos y culturales que sostienen el orden vigente. Por ello, la crisis del sistema de educación superior proyecta sus consecuencias más allá de sus límites propios, poniendo en tensión incluso la legitimidad de las instituciones que regulan la vida en sociedad, así como los cauces representativos vigentes para viabilizar la incidencia ciudadana en ellas. El sustrato normativo del malestar, contrariamente a lo que propugnan los enfoques culturalistas, no flota sobre nuestras cabezas como una idea antojadiza. Su fuerte arraigo proviene de las transformaciones recientes de la estructura social. Hace un año apuntábamos en esta revista que la significativa expansión de segmentos medios asalariados, con niveles de calificación medios y altos, como principal cambio de la estructura social en general, permite instalar hacia amplias capas de la población una “cultura del logro educacional” muy propia de estos sectores, que así como exportan el discurso del credencialismo como forma de legitimación, establecen respectivos mecanismos de cierre social para asegurar una valoración distintiva de la posición conquistada<sup>24</sup>. Es esta articulación “estructural” y normativa que se anuda en torno al sistema de educación superior la que permite comprender los niveles de frustración, exaltación y épica que hemos visto durante este año.

La amplificación del carácter social del conflicto fue estimulada, en buena medida, por la homogeneización de las condiciones de vida de los segmentos medios en la distribución del ingreso, que ante el estancamiento de los salarios y el crecimiento excluyente de las ganancias de las empresas de gran tamaño, comparten condiciones de vida similares. De acuerdo a Fundación Sol (en base a datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Calidad de Vida y Salud –ENETS), un 90% de las personas que trabajan ganan menos de

---

22 Adam Smith (2008). *“La riqueza de las naciones”*, Alianza Editorial, España.

23 Ver: Meller, Patricio (2011). *“Universitarios, el Problema no es el Lucro, es el Mercado”*, Uqbar Editores, Santiago.

24 Ruiz Carlos y Orellana Víctor (2011). *“Panorama Social de Chile en el Bicentenario”*, en Revista Análisis del año 2010, Departamento de Sociología, Universidad de Chile.

\$650.000 y un 76% gana \$350.000<sup>25</sup>. Este homogéneo valle del nivel de ingreso para la mayoría de la población, cambia recién en torno al 5% más rico<sup>26</sup>. Una situación que detenta gravitantes efectos, si se considera que uno de los rasgos distintivos del modelo de desarrollo vigente reside, precisamente, en el hecho de dejar cada vez más aspectos de la vida (salud, previsión, acceso a la educación, etc.) sujetos a la capacidad individual de consumo.

Agudizando los conflictos del sobre-endeudamiento generalizado (promedio cercano al 60% sobre los ingresos disponibles<sup>27</sup>), el CAE atizó las contradicciones que pesan sobre vastos segmentos de la población, especialmente en la parte más baja del abultado sector intermedio. Y, por lo demás, de cara a una de las expectativas más sentidas, el ascenso social, cuya frustración resulta muy difícil de procesar por unas instituciones que, por lo mismo, vieron agudizarse sus problemas de legitimación a niveles desconocidos en la historia reciente.

## LOS HIJOS DE LA MODERNIZACIÓN VAN A LA REVUELTA

El derrotero de una de las movilizaciones más prolongadas que recuerde la historia reciente, da cuenta del desgaste de los modos institucionales de resolución de conflictos anclados en el pacto de la transición. La baja credibilidad de la solución institucional, por un lado, y la carencia de fuerza suficiente para obligar al gobierno a ceder, por otro, desembocan en un enfrentamiento cerrado, con escasas posibilidades de maniobra por ambos lados, donde lo que prima es una suerte de capacidad de veto mutuo. Por otra parte, dada la pérdida de adhesión de los partidos políticos, aunada a su descomposición interna, el dato de la inexistencia de un referente político capaz de capitalizar y conducir la fuerza social desplegada, termina allanando el terreno hacia una ventaja relativa de la opción gubernamental por opción al desgaste de los estudiantes movilizados. Tras nueve meses de activa movilización, el escenario ha quedado finalmente abierto. Empero, el movimiento estudiantil aparece situado ante la encrucijada de idear las formas más eficaces de proyectar sus avances, sin caer en la apelación imposible a la reiteración de los niveles de energía social desplegados.

A principios de abril los estudiantes de la Universidad Central iniciaban una paralización de actividades, empujada como medida de presión para evitar la venta de acciones de su universidad a la Sociedad de Inversiones Norte-Sur. Las imágenes de la movilización se paseaban por los medios casi como una anécdota más, sin concitar demasiada atención. Días más tarde, y con un impacto mediático similar, un grupo de estudiantes ocupaba pacíficamente la Junaeb

---

25 Fundación Sol (2011), “¿Ingreso ético o salario ético?”, 12 de octubre, Santiago.

26 Orellana, Víctor (2011). “Nuevos Estudiantes y Tendencias Emergentes en la Educación Superior: Una Mirada al Chile del Mañana”, en Jiménez, Mónica y Lagos, Felipe, “Nueva Geografía de la Educación Superior y de los Estudiantes”, Aequalis, Santiago.

27 Banco Central de Chile (2011). “Informe de Estabilidad Financiera”, Santiago.

denunciando una serie de irregularidades en la entrega de becas. Hacia el final de mes se produce la primera marcha del CONFECH con cerca de 8000 asistentes. El petitorio incluía diversos temas, como una reforma al acceso a la educación terciaria, al sistema de becas y ayudas estudiantiles, un aumento del gasto público en educación, entre otros. Hasta entonces, nada muy distinto a las demandas habituales de carácter corporativo se apreciaba en el panorama.

Desde el gobierno, las voces críticas sobre el estado de la educación eran incorporadas como argumento para impulsar una postergada reforma al sistema de educación terciaria, que no había sido objeto de cambios sustantivos desde su momento fundacional en los años ochenta. En respuesta a este primer asomo del movimiento estudiantil, el gobierno inicia una avanzada enmarcada en la igualación de condiciones entre los establecimientos públicos y privados en la asignación de los fondos AFI y AFD, bajo la modalidad de *vouchers* portables; la instalación de convenios de desempeño como mecanismo privilegiado de financiamiento; el incremento de becas para la educación técnico-profesional; y cambios al sistema de acreditación, se cuentan entonces entre las medidas sugeridas.

Luego de la aprobación del Proyecto HidroAysén, se produce un cambio significativo en la capacidad de convocatoria de las manifestaciones callejeras (entre otros, con el llamado a varias marchas por parte del grupo Acción Ecológica). Ni el gobierno, que se preparaba para un escenario de manifestaciones desde antes de la aprobación del proyecto, avizoraba jornadas como las del viernes 13 de mayo, con cerca de 30 mil personas congregadas en Plaza Italia de la capital; que la semana siguiente escalarían sobre las 40 mil personas. Un día antes, 15 mil estudiantes de educación superior y secundaria marchaban desde la misma Plaza Italia, reposicionando sus demandas en espera de los anuncios del 21 de mayo. El nivel de conflictividad comenzaba a crecer, mientras el gobierno endurecía su postura negando autorización a las movilizaciones, al tiempo que acusando a sus organizadores como responsables de los desmanes que acompañan la manifestación en las calles.

Los anuncios del 21 de mayo no mostraron mayores cambios en la posición gubernamental, reiterando algunas de las líneas de reforma ya anotadas. Ante este cuadro, retornan las marchas y la CONFECH anuncia la radicalización del movimiento, a través de un ultimátum al gobierno, al proyectar movilizaciones en forma indefinida desde el mes de junio. La oposición al proyecto de HidroAysén convoca una última manifestación de alta concurrencia, para luego disminuir marcadamente su adhesión hacia fines de mayo. Por su parte, el ministro de la cartera de educación, Joaquín Lavín, entrega una primera respuesta al petitorio estudiantil. Durante este mes, marcado por la sostenida escalada de movilizaciones, el gobierno alcanza el nivel más bajo de su aprobación entre la población hasta entonces, con un 36% según los registros de Adimark.

Desde inicios del mes de junio, las tomas y paralizaciones se extienden a más de un centenar de liceos y unas cuantas universidades a lo largo de todo

Chile. Aparecen también nuevas y más variadas formas de protesta, como la carrera de las 1800 horas por la educación, simbólicos bailes masivos, la ocupación pacífica de algunos partidos como la sede de la Democracia Cristiana, etc. La atención nacional, e incluso internacional, sobre el movimiento empieza a crecer.

Con el avance de la movilización el problema del lucro se va perfilando como uno de los ejes centrales en las demandas del movimiento y la articulación del descontento. De esta forma los dardos apuntan a toda la elite política, desencajando a una oposición que intenta en múltiples ocasiones ponerse sobre el movimiento social. Ante el rechazo de la propuesta del ejecutivo y la crecida del apoyo al movimiento estudiantil, el oficialismo combina torpemente gestos de reconocimiento con ácidas condenas a dicho accionar social. Mientras la aprobación de Lavín cae en picada, se condenan las movilizaciones a través de la exaltación insistente de los hechos de violencia asociados a ellas, así como de la intransigencia de algunos grupos estudiantiles, intentando desfigurar el perfil mayoritario del movimiento. Se ordena el desalojo de liceos en toma y adelantan las vacaciones de invierno, sin mayor suerte. Simultáneamente, el gobierno reconoce la capacidad de los estudiantes para instalar el problema de la educación en el corazón del debate público.

Este errático manejo llega al paroxismo con el anuncio –en cadena nacional– del Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE). Como un triunfo de la sociedad en su conjunto, se anuncia entonces la reducción de la tasa de interés del CAE a un 4%, becas para el 40% más pobre, un poco claro Fondo para la Educación con recursos de los excedentes del cobre, la incorporación del ranking de educación secundaria como herramienta para el acceso, la creación de una Superintendencia de Educación Superior, entre otras medidas. No obstante, no hace otra cosa que sumar un nuevo fracaso.

A mediados de junio, lejos de amainar, las movilizaciones adquieren un nuevo impulso. La crecida en amplitud ahora alcanza las 100 mil personas en las calles de la capital, y otras 100 mil en el resto del país, sumando el apoyo, por primera vez, de algunos rectores, como Víctor Pérez (U. de Chile), Juan Manuel Zolezzi (USACH) y Luis Pinto (UTEM). Aunque, en lo sucesivo el papel jugado por los rectores resultará errático, entregando y restando su apoyo de acuerdo a las posibilidades de obtener mayores aportes basales para las instituciones del CRUCH, sin llegar a quebrar relaciones con el gobierno y la oposición. Por esos días, 8 estudiantes secundarios de Buin inician una huelga de hambre, mientras comienza a instalarse la agitación de la idea de un plebiscito autoconvocado desde la ciudadanía, para decidir el futuro de la educación superior.

Pero no sólo se incrementa la convocatoria. Comienzan a aparecer signos de afirmación identitaria. Entre ellos, los arrebatos patronales del presidente de RN, Carlos Larraín, en contra la “manga de inútiles subversivos” en las calles, terminaban dando lugar a una de las frases más reiteradas en muros, pancartas, poleas, canciones y obras de teatro, que a menudo terminan exaltando el malestar

contra la desigual estructura de oportunidades y su contención al interior de los modos vigentes de dominio.

En julio se llega a un punto álgido, con la salida de Lavín de la cartera de educación, ante la incapacidad de resolver la crisis, y los crecientes cuestionamientos sobre su validez como interlocutor, al estar directamente involucrado en una presunta falta a la ley que prohíbe el lucro. Un cuadro en el que, por descontento, se suman las presiones de sectores del oficialismo para enterrarlo como figura capaz de desplazar otros rostros de la derecha en las próximas contiendas electorales.

Iniciado el mes de agosto, se llega a los niveles más altos de convocatoria, al tiempo que la escalada de violencia alcanza niveles amenazantes. Dos sucesos contribuyen a difundir la idea de que se está al borde del precipicio. De un lado, la muerte del joven Manuel Gutiérrez Reinoso, de 14 años, a manos de un disparo policial, en las jornadas de protesta transcurridas durante la madrugada enmarcadas en la huelga de dos días convocada por la CUT. De otro, la jornada del 4 de agosto, que registra enfrentamientos en 12 ciudades del país, dejando un saldo de más de 500 detenidos. Durante esa jornada las barricadas se propagan por el centro de Santiago, sin tener como protagonistas a los encapuchados habituales. En su lugar, un heterogéneo grupo de civiles se toma las calles a rostro descubierto, ante el despliegue de un operativo policial de proporciones poco comunes para estos tiempos; al punto que, entre otras cosas, puso entre paréntesis la libertad de reunión en espacios públicos, a pesar del reclamo de organismos internacionales de D.D.H.H. Esa noche, en medio del inusual panorama, al que se agregaba el despliegue masivo de cacerolazos por toda la capital, se precipitaba el incendio de uno de los locales de la controvertida empresa del *retail* La Polar, en el centro de Santiago.

Las movilizaciones continuaron, hasta alcanzar un punto de inflexión en septiembre, con la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno (encabezado por el recién nombrado ministro Bulnes) y los representantes de los estudiantes secundarios y universitarios. En sintonía con el magro optimismo que anunciaron varios de los participantes del diálogo, el segundo encuentro terminó con el quiebre de la efímera mesa. El fracaso de la negociación era anticipado por una ley, empujada desde el oficialismo, para penar con cárcel la toma de establecimientos educacionales y suspender la entrega de becas Junaeb.

Tras el quiebre baja la intensidad de las movilizaciones. El movimiento estudiantil muestra signos de desorientación, sin dar con alguna fórmula para sacar del estancamiento un conflicto que permanecía en fojas cero tras largos meses de movilización. En medio de ese cuadro, el centro de atención se vuelca hacia el Congreso, que inicia las negociaciones para la aprobación de la ley de presupuesto. El resultado de cualquier acuerdo en materia de educación, debía verse necesariamente reflejado en la ley, lo que restó al movimiento capacidad para

marcar la pauta de discusión. Los tiempos volvían a estar fijados por la iniciativa institucional.

Con ello, tras varios meses de presión sostenida hacia la elite política, el cierre de acuerdos que salvaguardan el “modelo”, parecen reinstalarse en el centro decisional. Los reacomodos gubernamentales reflejan claramente un predominio incontrarrestado de los sectores más duros de la derecha, lo que asoma a través de una renovada resistencia a la deslegitimación sufrida en el armazón institucional y los partidos políticos. La aprobación del presupuesto 2012, por la vía de una comisión mixta, termina sepultando el último margen de maniobra que quedaba el pasado 2011 para el movimiento estudiantil. Las cuentas se trasladan, irresueltas, para el año entrante.

### **LAS ELITES, ENTRE LA INCREULIDAD Y LA TENTACIÓN POPULISTA**

Una vez que han quedado atrás los momentos más críticos del conflicto, el actor social más organizado y consciente de sus intereses en este período de la historia reciente, el empresariado, se enfrascó en disquisiciones sobre los desafíos que las tensiones sociales apreciadas este año representaban para la mantención del orden. El foco de la discusión se centró, de un lado, en una reforma tributaria como posibilidad para –por la vía incremento del gasto social y cierta redistribución del ingreso– aminorar los agudos grados de desigualdad presentes en la sociedad chilena. De otro, en la aprobación de una ley de inscripción automática y voto obligatorio, para superar unos preocupantemente bajos niveles de arraigo de la institucionalidad política; fomentando, según se ha dicho, la participación de los jóvenes, y obligando a los actores políticos a desplegar un esfuerzo mayor en satisfacer las demandas ciudadanas para atraer los votantes a las urnas.

Sin llegar a acuerdo sobre la pertinencia de estas medidas y las consecuencias que pueden acarrear<sup>28</sup>, la elite económica se debate entre el desconcierto y la propuesta, reconociendo con preocupación que hay “algo” que no se está viendo ni escuchando.

*“¿Qué no estamos viendo? ¿Qué no estamos escuchando? ¿Cuáles son los motivos de tanta frustración y pesimismo? ¿Cuál es la verdadera crítica al sistema económico? ¿Y al sistema político? ¿Puede este fenómeno escalar hasta transformarse en una amenaza para la institucionalidad y el estado de derecho?”*<sup>29</sup> Tal cual rezaba la convocatoria a la cumbre empresarial, ENADE 2011, que inventando el hilo negro reincorporó varias tesis pretéritas que iban desde un énfasis redistributivo, al estilo del laguista “crecer con igualdad”, hasta el intento de “rectificación del modelo” y la necesidad de mayor competencia, de

---

28 Particularmente en cuanto a la reforma del sistema electoral. Ver Editorial El Mercurio, 23 de diciembre de 2011.

29 ICARE, 24 de noviembre de 2011.

un Felipe Larca<sup>30</sup>. Empero, más allá de las preocupaciones de los sectores más lúcidos del empresariado, las disquisiciones mayoritarias sucumben a los cauces de la sospecha de estar situados ante un malestar antojadizo, especialmente a partir del contexto registrado como de crecimiento sostenido –y distintivo, a nivel internacional– de la economía, al punto de mirar por encima del hombro incluso a países desarrollados. De ahí la sorpresa, la constatación estupefacta, de una elite económica que, entonces incrédula, no va más allá de estimar que “el país está bien y la política, mal”<sup>31</sup>.

El grueso del empresariado criollo no logra advertir lo que sucede en los confines de sus dominios. Tan seguros del curso de modernización seguido en las últimas décadas, tan convencidos de sus cifras, que no logran concebir los motivos del creciente malestar. Parece la vuelta de una centenaria postal, que entregaba Valdés Canje ante la vieja elite del siglo XIX en medio de sus festejos por el centenario: *“Mirando la llanura desde las cumbres, está espuesto a engañarse el ojo mas esperto: desaparecen los detalles, los contornos se suavizan, los objetos se confunden; el arroyo puro i transparente i la charca cenagosa i putrefacta brillan con la misma nitidez de plata bruñida (...) Pero el que por esa misma llanura camina a pie, cansado i sudoroso, bajo un sol de fuego, respirando el polvo de la vía triste i escueta, ve las cosas de un modo mui diverso”*<sup>32</sup>.

Cien años más tarde, en un país donde la expansión del consumo acerca los contrastes, la distinción desde las cumbres es aún más borrascosa. A pesar de ello emergen algunos sectores con mayor capacidad de lectura del momento. Hoy, desde algunas trincheras del empresariado se estimulan ajustes de tuercas para “consolidar lo avanzado”, contraviniendo ese mayoritario “avanzar sin transar” que campea bajo la sospecha de que no se trata sino de un malestar pasajero, que “más temprano que tarde” terminará por diluirse bajo “el paso ineluctable” del modelo de modernización vigente; recordando, de paso, que la inflación ideológica, no distingue el carácter de las elites a la hora del contagio.

Pero esta encrucijada empresarial no se resuelve exclusivamente en la cancha política de la derecha. Durante los pasados gobiernos de la Concertación relucieron varias de las aristas presentes en la discusión actual. No debiera sorprender, entonces, que ante esta coyuntura, mientras una fragmentada Concertación busca sacudirse de muchas de las marcas provenientes de sus últimos veinte años de historia, connotadas figuras de la derecha, como Pablo Longueira, se apuren a tomar la posta y rescatar lo mucho que se ha avanzado desde entonces. Si al interior del gobierno se debaten cursos de reformas, como las propuestas

---

30 Ver: Ruiz, Carlos y Boccardo, Giorgio (2010). *“Problemas Sociales de la Concentración Económica (Vistos desde la crisis)”*, Revista Análisis del año 2009, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago.

31 Thielemann, Luis, *“Defender el Orden de Noruega contra los Monstruos de Angola”*, Revista Daño Estructural, 29 de Junio de 2011.

32 Valdés Canje J. (1910) *“Sinceridad: Chile Íntimo en 1910”*, Imprenta Universitaria, Santiago.

tributarias y regulatorias del mentado Longueira, con los planteamientos más ortodoxos de Felipe Larraín; ello no invalida que, a ojos del empresariado, esas y otras propuestas aún pueden ser encarnadas por el conjunto del espectro político constituido en los marcos de la transición hace dos décadas, lo que todavía habilita a la Concertación como opción para garantizar estos ajustes al modelo de modernización vigente. En este sentido, si bien el apuntado populismo de derecha coquetea con reformas sentidas por amplios sectores de la sociedad, aún no consigue el respaldo dentro de sus propios partidos, en especial dentro de la UDI.

No obstante, más allá de este escenario, cabe preguntarse sobre la capacidad efectiva de volver a convocar el apoyo de los sectores sociales que hoy expresan su malestar, y aplauden sin mucho disimulo alternativas que no encajan precisamente dentro de las bases institucionales y normativas del orden, como el reciente movimiento universitario. El conflicto educacional ha desnudado la vulnerabilidad de ese acuerdo social pasivo, no orgánico ni expresado en actores sociales gravitantes, en que se ha sostenido el modelo de modernización vigente. De modo que cualquier alternativa de ajuste debiese ser capaz de contener y expresar nuevos términos de acuerdo y organicidad social.

De momento, todo parece indicar que la coincidencia de intereses rentistas y concentradores de la elite económica, por un lado, y el resto de la población, por el otro, detenta límites muy estrechos para el desarrollo de semejante tarea. A la vista del año que termina, la salida del conflicto estudiantil de 2006 resulta una muestra patéticamente diáfana de lo inconciliables que resultan esos intereses centrados en una acumulación rentista, sobre nichos regulados por respaldo estatal, como aquellos provistos por el mencionado CAE, y, de otro lado, las expectativas de ascenso social que extendidos sectores de la sociedad chilena aprecian a través del logro educativo.

Ante la demanda abierta y masiva por una educación pública de calidad, el gobierno de Michelle Bachelet no dudó en mantener y profundizar los mecanismos subsidiarios de financiamiento de la educación primaria y secundaria, así como continuar con la ampliación del CAE, cuyo diseño –proyectado un año antes en el gobierno de Ricardo Lagos–, no equivalía a otra cosa que la puesta en marcha de nuevos nichos para una acumulación privada garantizada por el Estado. Tal fórmula, puesta en marcha por el binomio Bitar–Bachelet, es lo que ha terminado por explotar este año que termina. Las soluciones gubernamentales actuales, centradas en ajustar tal fórmula (también consensuada entonces con la derecha opositora), vuelven a ignorar el problema de la calidad de la educación y se refugian en el acceso, a través de mecanismos cuyos niveles de lucro ofrecen hoy morigerar frente a los groseros niveles heredados. De este todo, el problema de fondo volverá a aparecer una y otra vez, y con eso, la vocación de desarrollo que dicen encarnar nuestras elites políticas y económicas, irá quedando crecientemente en entredicho. Y, con eso, los problemas de adhesión y perspectiva política.